

# Momentos

por Carlos Rozanski

Con motivo de la aceptación de mi renuncia al cargo de juez de Cámara Federal por parte del Sr. Presidente de la Nación, se imponen algunas breves líneas a modo de cierre de una etapa personal y profesional.

A lo largo de veinticinco años –diez en San Carlos de Bariloche y quince en La Plata– ejercí la magistratura como juez de Cámara por concurso. Durante ese cuarto de siglo, jamás sentí presión alguna de parte del Estado provincial o nacional, debiendo tenerse en cuenta que diversos Gobiernos con distintas orientaciones políticas han regido esos años los destinos del país.

Las presiones, amenazas y agresiones, tanto personales y familiares como sufridas por colaboradores, han provenido siempre de los mismos sectores violentos que llevaron adelante el proyecto económico de la dictadura y que en los años setenta utilizaron el terrorismo de Estado para imponer dicho designio. Con ese objetivo necesitaron disciplinar a la sociedad, para lo cual, como quedó probado en la Justicia, secuestraron, torturaron, robaron identidades de niños, se apropiaron de empresas millonarias, asesinaron y desaparecieron a decenas de miles de personas en una orgía de sangre que no tiene otro nombre que genocidio.

Luego de veinte años de impunidad, una luz encendida desde el propio Estado empezó a iluminar el camino de la reparación y, por primera vez en el mundo, tribunales del propio país en el que se cometió el genocidio comenzaron a juzgar y condenar a los responsables materiales. En una progresión incontenible, se llegó a trascender a los asesinos y torturadores de mano propia y se avanzó sobre los cómplices civiles. Ese avance, que avizoraba la suerte de diversos sectores responsables desde el inicio del proceso asesino, encendió una alerta mucho más fuerte que el juzgamiento de miembros de fuerzas de seguridad. Los procesos sociales de justicia *real* respecto de crímenes de masas no se detienen en los ejecutores, sino que llevan naturalmente a investigar y eventualmente a castigar a sus verdaderos jefes: economistas, abogados, sacerdotes, jueces y empresarios, sin los que

jamás se podría haber llevado a cabo el proceso genocida. Claro está que los sectores mencionados no incluyen a aquellos sacerdotes, políticos, empresarios y jueces que se opusieron horrorizados a la barbarie asesina de ese proceso. Por supuesto, tampoco a quienes, integrando cualquier categoría social de las mencionadas, se enfrentaron a los mercaderes de la muerte y corrieron la misma suerte que los miles de obreros, estudiantes, docentes y dirigentes que pagaron con su vida o el exilio el enfrentar con dignidad la violencia de los tiranos.

Hoy, con dolor, debo hacer público que, por primera vez en más de tres décadas de vigencia institucional, se percibe que el Estado avanza sobre jueces y fiscales de la nación.

Valiéndose de los mismos medios de comunicación que llevan a cabo sus operaciones en papel manchado de sangre, anuncian a través de algunos periodistas, en no menos ensangrentados canales de televisión, la suerte de los magistrados seleccionados. Luego, sin que la verdad tenga importancia alguna, con burdas mentiras y difamaciones bizarras, se ponen en marcha los mecanismos legales para llegar –con métodos ilegales– a los fines propuestos. Todo ello, a fin de evitar que el proceso actual continúe mostrando a la sociedad las complicidades civiles que exceden a los uniformados y esponga legal, ética y materialmente a quienes gozaron durante décadas no sólo de la impunidad que la tradición les garantizó, sino, además, de las inmensas fortunas obtenidas tanto con el proyecto económico que sostuvieron como con la rapiña de las empresas y bienes de los que se apropiaron bajo tortura, las cuales les permitieron disponer de los ríos de papel en los que volcaron y vuelcan hoy sus operaciones de prensa.

Se podrán deshacer de algunos jueces y fiscales, pero jamás podrán manchar treinta y tres años de democracia, de desenmascaramiento de asesinos y cómplices, de repudio al terrorismo de Estado, y del irreversible camino hacia la verdad, la justicia y la memoria que la inmensa mayoría del pueblo argentino decidió transitar.